

Colin Crouch

# La extraña no-muerte del neoliberalismo

**ci** Capital intelectual

Crouch, Colin  
La extraña no-muerte del neoliberalismo  
1a ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.  
304 p., 21x15 cm.  
Traducido por: Blas Raventos  
ISBN 978-987-614-390-5  
1. Economía. 2. Neoliberalismo. I. Título  
CDD 330.1

Traducción: Blas Raventos

Edición: Aurora Chiaramonte  
Diseño de tapa: Peter Tjebbes  
Diseño de interior: Verónica Feinmann  
Coordinación: Inés Barba  
Producción: Norberto Natale

© Colin Crouch, 2012  
© Capital Intelectual, 2012

1ª edición: 2000 ejemplares • Impreso en Argentina

Esta edición se publica con acuerdo de Polity Press Ltd., Cambridge.  
Traducida de *The strange non death of neo-liberalism* (1st edition), 2011.

Capital Intelectual S.A.  
Paraguay 1535 (1061) • Buenos Aires, Argentina  
Teléfono: (+54 11) 4872-1300 • Telefax: (+54 11) 4872-1329  
www.editorialcapin.com.ar • info@capin.com.ar

Pedidos en Argentina: pedidos@capin.com.ar  
Pedidos desde el exterior: exterior@capin.com.ar

Queda hecho el depósito que prevé la Ley 11723. Impreso en Argentina.  
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso escrito del editor.

# Capítulo 1

## La carrera previa del neoliberalismo

Como analizaremos más adelante en detalle, el neoliberalismo comenzó a prevalecer cuando su opuesto predecesor, conocido como gestión keynesiana de la demanda, entró en su propia crisis masiva con la inflación de la década de 1970. Si esa crisis se demostró terminal, ¿no deberíamos esperar el final de la hegemonía neoliberal y la emergencia de algo nuevo como consecuencia de la crisis actual? No. Fue la crisis del propio keynesianismo lo que lo llevó a su colapso –más allá de los ajustes que se le hicieron–, no porque hubiera algo fundamentalmente erróneo en sus ideas, sino porque la clase en cuyo interés principalmente actuaba –los obreros manuales de la industria occidental– se encontraban en decadencia histórica y per-

dían su poder en la sociedad. Por el contrario, las fuerzas que más ganan con el neoliberalismo –las corporaciones globales, particularmente las del sector financiero– mantienen una importancia casi incuestionable.

A pesar de que fue el comportamiento de los bancos el que causó la crisis de 2008/2009, éstos emergieron de ella más poderosos que antes. Se los considera tan importantes para la economía de principios del siglo XXI que debieron ser protegidos de las consecuencias de su propia locura. En cambio, la mayoría de los otros sectores perjudicados por los efectos de la crisis no fueron protegidos. Al sector público le fue aún peor, se le aplicaron recortes masivos en los recursos. Mientras los succulentos bonus pagados a los directivos de algunos bancos se convertían en un tema central de los debates, el mantenimiento de los mismos se justificaba con el argumento de que eran necesarios para devolver la solvencia al sector financiero –y, por lo tanto, a naciones enteras– a pesar de que esos bonus dependían de los aportes de los contribuyentes a la operación de rescate.

El sector financiero ha demostrado su dependencia del resto de la sociedad en sus operaciones –al menos en el mundo anglo-americano, que ha alimentado esta particular modalidad de las actividades bancarias–. Y como ha sido protegido mientras otros sectores y el sector público sufren recortes, todo indica que prevalecerá más que nunca en la estructura económica de esos países.

Antes de considerar los efectos de esta situación que, según sostiene el neoliberalismo, son propios del libre mercado, debemos observar detenidamente al neolibe-

ralismo en sí: qué es y de dónde viene. Más adelante, en los capítulos 2 a 4, examinaremos el típico debate “Estado versus mercado”, y cómo las corporaciones emergen de esa confrontación con un rol principal, cambiando de naturaleza en el proceso. En el capítulo 5 retomamos en más detalle el cambio de keynesianismo a neoliberalismo que mencionamos antes y sus implicaciones más amplias; y concluye demostrando por qué la gran empresa emerge como institución clave a continuación de la reciente crisis. El capítulo 6 examina los contornos políticos de sociedades en las que las empresas han adquirido centralidad política, incluyendo consideraciones sobre la idea de la responsabilidad social empresaria. El capítulo 7 cambia el discurso y enfoca un tema que recorre los capítulos precedentes: ¿en qué punto se ubican los valores, particularmente los concernientes a asuntos públicos y colectivos, en la relación entre Estado, mercado y empresa? El capítulo final trata de aportar algunas respuestas a la pregunta: ¿cómo podemos hacer frente a todo esto?

## El neoliberalismo, orígenes y falso inicio

Muchas de las palabras que hoy usamos para describir la vida pública contienen los prefijos “neo” o “post”: neoliberal, neoconservador, neolaborismo, postindustrial, posmoderno, posdemocrático. Parecemos decididos a demostrar que somos personas ocupadísimas en producir sucesivos cambios sistémicos pero inseguros de las instan-

cias en las que ingresamos, razón por la cual nos definimos por lo que dejamos atrás (concepto post) o sugerimos vagamente alguna innovación (concepto neo). Neoliberalismo es una de esas palabras. Para tener una idea inicial del término necesitamos saber qué es (o era) el liberalismo, y qué se quiere decir con el prefijo “neo”.

“Liberalismo” es una palabra tan escurridiza como puede serlo un término político. A medida que uno camina en dirección a Occidente el significado tiende a moverse hacia la izquierda política. En Europa, y especialmente en los antiguos países de economía estatizada de la Europa central y oriental, se asocia con los partidos políticos que representan la aplicación estricta de los principios del mercado a la vida económica, así como un amplio sustento a las libertades civiles. Lo primero suele asociarse con la derecha política; lo segundo, con la izquierda.

En Estados Unidos, liberalismo tiende a referirse a la izquierda política en general; los liberales europeos comparten este compromiso con las libertades civiles y la crítica a cualquier política de poder ejercida por una religión organizada; pero se oponen diametralmente a esta tradición cuando se trata del mercado. Los liberales norteamericanos tienden a creer en el intervencionismo estatal, lo opuesto al habitual significado del término liberal.

Para comprender esta complejidad tenemos que volver a los siglos XVII y XVIII, cuando en toda Europa, y más tarde, en América del Norte, se abrió paso la crítica a los poderes combinados de monarcas, aristócratas, papas y obispos. Estos poderes no aceptaban que la gente común

tuviera derechos, solo le admitían aquellos privilegios y libertades especificadas (en plural) otorgadas y revocables por los propios poderes. Mientras la lucha se desarrollaba a nivel de ideas y por la libertad de pensamiento, una base de poder alternativo al de la Iglesia y el Estado monárquico estaba disponible en la riqueza comercial y, con el tiempo, industrial de la burguesía. La demanda de los comerciantes por mercados liberados del control de autoridades civiles y religiosas, que gozaban de las ganancias obtenidas a cambio de la concesión de licencias monopólicas, se unía al clamor general que reclamaba libertad como una cualidad singular, indivisible del ser humano, derecho que nadie contaba con el poder de conceder.

En la práctica, en un mundo en el que los poderes existentes –Iglesia, Estado y propietarios de la tierra– no podían desaparecer con solo desearlo, la lucha por la libertad adoptaba la forma de pretender varias separaciones: el Estado de la economía; la Iglesia de la política; y todas estas instituciones, e incluso la familia, de los juicios morales sobre el modo en que los individuos se conducen en sus vidas.

La idea era que a través de la compartimentación de la vida que se podía lograr con estas separaciones, se restringiría el acceso al poder y se conseguirían las libertades individuales. Desde la perspectiva de los conservadores, ese proceso sumía a las personas en la soledad, las volvía anómicas y carentes de una moral compartida, y dejaba a la sociedad fragmentada y desorientada. Hacia el final del siglo XIX, la propiedad burguesa (el derecho de propiedad

y los derechos liberales asociados a la posesión de fábricas y el empleo de fuerza de trabajo) se habían convertido, a su vez, en fuentes de poder y dominio.

Los trabajadores y otras personas cuyas vidas no podían separarse demasiado del control de un empleador, ahora querían la libertad también para ellos. Y buscaron en el Estado, que se democratizaba paulatinamente, un contrapeso de poder. Los críticos sociales pusieron el foco de su oposición en el creciente dominio del dinero y los valores comerciales sobre todas las esferas de la vida social.

La tradición liberal se había partido en dos. Por un lado, una parte social concentrada en la obtención de derechos, incluido el derecho de las masas trabajadoras de alzarse por encima de la pobreza, y que, paradójicamente, buscaba ayuda en el viejo enemigo de los liberales: el Estado. Los liberales de este tipo se encontraban a menudo en la incómoda compañía de los socialistas, que querían usar el poder del Estado para suprimir la propiedad capitalista. Pero había también una parte económica, que ponía el acento en las libertades de los propietarios y en las transacciones de mercado. Los liberales de este tipo se encontraban ahora cada vez más convergiendo con viejos enemigos conservadores, protectores del antiguo régimen, defendiendo la autoridad y el derecho de propiedad de todo tipo de ataque, en particular de los que llegaban desde el campo de la democracia.

Un Estado democrático dominado por una clase de trabajadores desposeídos amenazaba con oponerse a la separación entre economía y política, que era central tanto

para el concepto de libertad como para el funcionamiento eficiente del mercado. Y una complicación más: liberales sociales, socialistas y conservadores a veces se unían para denunciar el triunfo de los valores materialistas y la ausencia de juicios morales que el capitalismo y el liberalismo económico habían promovido. Diferentes corrientes del liberalismo, ya sea en la forma de sistemas de pensamiento o de partidos políticos, fueron tomando rumbos separados, con diferentes énfasis en distintas partes del mundo.

En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de la confrontación inicial del liberalismo con el Estado había cambiado completamente. Durante la década de 1920 la economía capitalista liberal con intervención mínima del Estado parecía haber fracasado empujando al mundo a una severa depresión. En los años 30, tres enfoques alternativos sobre la organización de la vida económica parecían ofrecer mucho más en cuanto a eficiencia y capacidad de crecimiento: el comunismo que se practicaba en la Unión Soviética; el fascismo de Alemania e Italia; y varias combinaciones de gestión estatal y Estado de bienestar que se habían aplicado en Estados Unidos, en los países escandinavos y, brevemente, también en Francia.

Aun con variantes entre ellos, todos hacían uso del poder estatal en una forma no prevista en el liberalismo clásico. Después de la guerra, uno de ellos, el fascismo (con algunas excepciones) fue aplastado. El Estado soviético gobernaba la mitad de Europa con poderes dictatoriales pero –así parecía en esos tiempos– con alguna competencia económica; y pronto iba a ser acompañado, aunque en una

alianza incómoda y solo temporaria, por un sistema similar en el país más poblado del mundo, China. En Europa occidental, América del Norte, Japón, India y Australasia las muy distintas formas del enfoque escandinavo-franco-norteamericano, referido a las variadas intervenciones del Estado democrático en una economía capitalista, atrajo el apoyo de prácticamente todos los matices de la opinión política e intelectual.

En su forma social el liberalismo podía vivir demandando derechos y libertades, pero sin el componente, que una vez fuera fundamental, del reclamo de poseer y controlar la propiedad sin interferencia del Estado.

Volveremos en un momento a una descripción más detallada de las intervenciones estatales, pero primero tenemos que ver qué fue lo que pasó posteriormente con las ideas del liberalismo económico, que nunca desaparecieron.

La creencia en indiscutibles derechos de propiedad, mínimos niveles de regulación y bajos impuestos mantuvo su gran atractivo para gente muy rica que siempre estuvo dispuesta a financiar proyectos intelectuales del liberalismo económico y a sostener a sus protagonistas durante los años de vacas flacas. Además, como la verdad sobre las condiciones de vida y la ausencia de libertad en el socialismo de Estado de los países del Este llegó a ser ampliamente conocida, funcionaba para todos como un constante recordatorio de los peligros del poder estatal.

Esta convicción fue particularmente fuerte en Estados Unidos, donde el antiguo legado del imperio inglés y luego la corrupción política desenfrenada después de la

independencia habían generalizado las sospechas sobre el Estado. Se produjo así una corriente de opinión política que prácticamente identificaba toda acción del gobierno en la economía y la sociedad con el comunismo, y reclamaba medidas enérgicas para erradicar de la vida pública a todo el que pudiera estar asociado con tales posturas. En la década de 1950 esto derivó en las campañas altamente intolerantes encabezadas por el senador McCarthy. La defensa del liberalismo económico se había convertido en algo muy poco liberal, lo que contribuyó a que, en Estados Unidos, la palabra liberal terminara invirtiendo su sentido original, para significar, en cambio, el apoyo al Estado de bienestar y a otras intervenciones estatales en la economía.

El contraataque del liberalismo económico comenzó previamente a toda esta situación. Antes del final de la Segunda Guerra un grupo de liberales alemanes y austríacos habían analizado la forma en que, después de la eventual desaparición de Hitler, podría establecerse en Alemania un orden económico que recreara a la burguesía empresarial que ellos consideraban igualmente aplastada por el comunismo, el fascismo y las políticas intervencionistas del Estado democrático. Estos liberales no compartían la idea de que toda acción del Estado fuera sospechosa; consideraban que la acción estatal debía apuntar a salvaguardar la economía de mercado en la que ellos creían. Concebían la competencia entre muchas empresas como un factor central para el funcionamiento eficiente del mercado, para que los consumidores pudieran elegir y para el mantenimiento de una clase burguesa que no

debía ser desplazada por un proletariado anti-capitalista ni tampoco adquirir el poder de los “grandes negocios”, las gigantes corporaciones que apoyaban a Hitler.

Les preocupaba que el resultado del proceso competitivo fuera generalmente la eliminación de la competencia, con los ganadores quedándose con todo y absorbiendo a sus rivales, lo que derivaba en el triunfo de las grandes empresas. A estos liberales alemanes les atraía la legislación antimonopólica de Estados Unidos que utilizaba la ley (y, por lo tanto, el poder del Estado) para limitar la cuota de mercado a las corporaciones y de ese modo proteger a la competencia de sus propias consecuencias.

El sistema por el que ellos abogaban no implicaba mercados sin restricciones, era un *ordoliberalismo*: un liberalismo económico en el que la competencia estuviera garantizada legalmente. Para reflejar ese concepto, el nombre que adquirió con el tiempo la práctica de esa tendencia en la Alemania Occidental de la posguerra (la República Federal de Alemania) fue “economía social de mercado”. En otro de los giros copernicanos que invierten el sentido de los términos políticos, este concepto, que originariamente formaba parte del ataque liberal al Estado social intervencionista, en la década de 1980 pasó a ser utilizado para designar al Estado social intervencionista en sí mismo.

Pero estos nuevos liberales económicos buscaban que el Estado –más específicamente, la ley– cumpliera solo el rol de garantizar la eficacia de las fuerzas del mercado, sin perseguir otros objetivos. Sus ideas se difundieron fácilmente en Estados Unidos, donde pasaron a ser conocidos

como “neoliberales”, porque el liberalismo como tal había adquirido allí un significado totalmente distinto. Ahora hay muchas variantes y matices del neoliberalismo, pero si nos quedamos en aquella preferencia fundamental por el mercado sobre el Estado como medio para resolver problemas y alcanzar fines humanos, habremos captado lo esencial. Lo que debemos analizar es cómo fue posible este retorno no solo en el plano de las ideas sino también en el ámbito de la política práctica. Esto requiere explorar un poco los otros enfoques de política económica y social que crecieron en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

## El momento socialdemócrata

El socialismo de Estado o comunismo, el fascismo y el liberalismo económico expresan, todos, sistemas muy claros de dirección política. Las corrientes que surgieron en Occidente como sus principales rivales un poco antes, durante o inmediatamente después de la Segunda Guerra fueron más variadas, como corresponde al papel que desempeñaron en la búsqueda de compromisos sociales entre los antagonistas mayores, quienes a su vez aceptaron tanto la imposibilidad de una victoria sobre el otro bando como también el hecho de saber con certeza cuáles podrían ser las políticas más exitosas. En los últimos tiempos se ha vuelto un lugar común asociar los términos “socialdemocracia” y “economía social de mercado” con estas alternativas.

Que en este caso el concepto fue “dado vuelta” ya se ha señalado, pero lo mismo ocurre en parte con el primero. “Socialdemocracia” fue originalmente uno de los nombres elegidos por los movimientos de trabajadores anti-capitalistas de fines del siglo XIX. Otros eran “socialista”, “comunista”, “laborista”. Todos eran términos más o menos intercambiables, usados por movimientos que originalmente adoptaron políticas que apuntaban a la supresión del capitalismo y su sustitución, en principio por propiedad estatal, pero, con el tiempo –así lo esperaban– por un sueño amorfo de propiedad popular que incluso llegaría a terminar con el Estado.

Tras la Revolución Rusa de 1917, casi todos los partidos que en el mundo se aliaron con la nueva dirigencia soviética tomaron el nombre de “comunistas”. Los otros términos no adquirieron ninguna connotación diferenciada hasta la década de 1950, cuando tanto el partido sueco de los trabajadores como el alemán pasaron a llamarse “socialdemócratas”, abandonaron el objetivo formal de una superación del capitalismo y proclamaron, en cambio, que su objetivo era trabajar dentro de una economía caracterizada por el dominio de la propiedad privada. Incluso en 1959 los socialdemócratas alemanes adoptaron el lema: *So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig* (Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario). Otros partidos, como el Laborista británico, ya habían llegado a esa misma posición, pero no estuvieron dispuestos a aceptarlo abiertamente hasta mucho más tarde (hasta la década de 1990 en el caso británico). A partir de aquella época, “socialdemó-

crata” pasó a designar ese tipo de política moderada de centro-izquierda. Todavía aludía a un tipo particular de partido político, pero hacia la década del 90, como su ex antagonista “economía social de mercado”, se había generalizado, ubicándose en el amplio campo de compromisos entre el mercado puro y una economía predominantemente estatal.

Durante el tercer cuarto del siglo XX la mayor parte del espectro político –por lo menos en los países de Europa Occidental– ocupaba ese espacio ahora tan vagamente llamado socialdemócrata. Sin embargo, en el mundo, con excepción de los países nórdicos, los partidos socialdemócratas como tales solo ocasionalmente condujeron gobiernos. En la actualidad, el término “socialdemócrata”, igual que “conservador” y “liberal”, tiene una acepción en mayúsculas y otra en minúsculas. Socialdemócrata, Conservador y Liberal indican partidos políticos u otras organizaciones sociales formales; socialdemocrático, conservador y liberal indican sistemas de ideas, enfoques de política y modos de pensar mucho más amplios.

Así considerada, la socialdemocracia abarca todas las estrategias que combinen el poder del Estado con el mercado para tratar de desarrollar una economía que maximice la eficiencia pero al mismo tiempo prevenga graves shocks, persiga ciertos objetivos sociales que no se lograrían solo a través del mercado y limite las desigualdades que resultan de los procesos de mercado. A veces, aunque no tan a menudo como se supone, el objetivo de alcanzar eficiencia está en tensión con el de reducir las desigualdades. Sin embargo, son interdependientes.

Los países con desigualdades extremas carecen de una amplia y próspera base de consumidores en condiciones de sostener la demanda en la economía, así como de un número importante de personas con suficiente seguridad económica como para desarrollar las actitudes críticas e innovadoras que estimulan el dinamismo y, en última instancia, la eficiencia. Debido a esa interdependencia la socialdemocracia fue capaz de definir una amplia gama de compromisos sociales, y es a causa de la tensión subyacente entre Estado y mercado que los respectivos límites que se imponen mutuamente han constituido el nudo de la discordia política durante el siglo XX y ya entrado el siglo XXI.

Una de las razones por las cuales en todos esos años las élites tuvieron una visión temerosa y pesimista de la democracia consistía en que no podían concebir cómo se lograría una prosperidad masiva con suficiente rapidez como para satisfacer las demandas de un pueblo literalmente hambriento antes de que su ira desmantelara los derechos de propiedad. Las élites más optimistas, como la británica, tuvieron esperanzas en una expansión gradual, simultánea, tanto del derecho de propiedad como del de ciudadanía, sostenido el primero con ayuda de los salarios crecientes, la estabilidad de los trabajadores manuales calificados, la demanda creciente de empleados de oficina y de fenómenos como las sociedades de crédito hipotecario, que lentamente extendieron la tenencia de propiedades residenciales.

Pero el problema no solo consistía en que los trabajadores eran pobres y carecían de propiedad. Sus vidas

también eran profundamente inseguras, ya que la creciente economía de mercado estaba sujeta a grandes fluctuaciones. La política social de finales del siglo XIX, que comenzó en Alemania y se extendió poco a poco a Francia, el imperio austríaco, Gran Bretaña y otros lugares, trató de ponerle un piso sólido a esa inseguridad y estableció seguros de protección contra la pérdida de ingresos por desempleo, enfermedad y vejez. Las ambiciones y, por lo tanto, los logros de estas políticas fueron limitados, pero forman parte de los pilares de lo que se convertiría en la socialdemocracia.

Estas fueron las tendencias que con el tiempo socavaron la fe en el liberalismo económico. Pero antes es preciso registrar una respuesta más sustancial al problema de la pobreza y más compatible con el liberalismo económico, que surgió a comienzos del siglo XX: el sistema de producción masiva, asociada inicialmente con la Ford Motor Company de Estados Unidos. La tecnología y la organización del trabajo podían mejorar la productividad de trabajadores sin calificación, llevando a una fabricación más barata de productos y un incremento de los salarios que hacía posible a los trabajadores comprar más bienes.

El productor masivo y el consumidor de productos masivos llegaron juntos. Es significativo que el avance se produjera en el gran país que durante ese período más se acercó a una idea básica de la democracia (aunque sobre una base racial). Tanto la democracia como la tecnología contribuyeron a la construcción del modelo. Sin embargo, como lo mostraría el crack de Wall Street de

1929, pocos años después del lanzamiento del modelo fordista, el tema de la inseguridad macroeconómica (es decir, al nivel de la economía en su conjunto) mantenía su importancia decisiva.

El problema de reconciliar la inestabilidad del mercado con la necesidad de estabilidad de los consumidores-votantes seguía sin resolverse. En gran parte de Europa las tendencias hacia el comunismo y el fascismo se fortalecieron. De forma más moderada y consistente con la democracia, la creencia en la necesidad de intervención de los Estados para salvar a los mercados de su aparente vulnerabilidad respecto a la autodestrucción también se vio reforzada. A finales de la Segunda Guerra estaba claro para las élites de las sociedades industrializadas que el intento de defender a la propiedad del avance de la democracia a través del fascismo había sido un desastre.

El capitalismo y la democracia tendrían que ser interdependientes, al menos en aquellas partes del mundo donde los movimientos populares no podían ser fácilmente aplastados. La virtuosa espiral del modelo fordista, que relacionaba la tecnología de la producción en masa con el aumento de salarios y por lo tanto con el aumento de la masa de consumidores y con una mayor demanda de bienes producidos en masa, era parte de la respuesta. Una visión más amplia de política social surgía por entonces en los Estados de bienestar de los países escandinavos y de Gran Bretaña y abordaba el problema de la inseguridad. Los consumidores de la clase trabajadora seguros y confiados, lejos de ser una amenaza para el capitalismo, podían

permitir una expansión de los mercados y las ganancias en una escala sin precedentes. El capitalismo y la democracia se convirtieron en interdependientes.

Otro elemento jugó un papel importante en el mantenimiento de este modelo emergente: lo que se conoce generalmente como gestión keynesiana de la demanda, en referencia al economista británico John Maynard Keynes (a pesar de que las ideas fueron desarrolladas en general por grupos de economistas británicos y suecos). Ese concepto se aplicó sobre todo en los países escandinavos y en el Reino Unido, Austria y, en menor medida, Estados Unidos, pero también fue adoptado por organismos internacionales como el Banco Mundial, y durante tres décadas constituyó una especie de ortodoxia en todo el mundo capitalista occidental. En tiempos de recesión, cuando la confianza es baja, los Estados se endeudan con el fin de estimular la economía con sus propios gastos. En tiempos de inflación, cuando la demanda es excesiva, reducen sus gastos, pagan sus deudas y reducen el conjunto de la demanda.

El modelo requería grandes presupuestos estatales, para garantizar que los cambios tuvieran un efecto adecuado a nivel de la economía nacional. Para la británica y para algunas otras economías esta posibilidad solo se concretó con el enorme aumento del gasto militar promovido por la Segunda Guerra Mundial. Las guerras anteriores habían supuesto grandes incrementos en el gasto estatal, siempre seguidos por reducciones importantes. La Segunda Guerra Mundial fue diferente, ya que cuando ter-

minó, el gasto militar fue reemplazado por desembolsos en el nuevo y creciente Estado de Bienestar.

El modelo keynesiano protegía a la gente común de las rápidas fluctuaciones del mercado que llevaban inestabilidad a sus vidas suavizando el ciclo económico y habilitándola poco a poco para convertirse en confiados consumidores masivos de los productos de una también confiable industria de producción masiva. El desempleo se redujo a niveles muy bajos. El Estado de Bienestar no solo proporcionaba a los Estados instrumentos para gestionar la demanda sino que proveía asimismo servicios reales de gran importancia a gente que se encontraba fuera del marco del mercado.

El keynesianismo no era hostil ni a los mercados ni al capitalismo. Una amplia gestión de la demanda, sumada al Estado de Bienestar, protegía al resto de la economía capitalista de las grandes crisis de desconfianza, de una intervención más minuciosa en los mercados y de ataques de fuerzas políticas hostiles, al tiempo que las vidas de los trabajadores eran protegidas de los caprichos del mercado. Era un verdadero compromiso social.

Un componente final del modelo de gestión de la demanda en la posguerra eran las relaciones industriales neocorporativas. Esto no había sido anticipado en los escritos de Keynes, y si bien no tuvo peso en Estados Unidos y apenas en Gran Bretaña, fue fundamental en los países nórdicos, Holanda y Austria. En las relaciones industriales neocorporativas, los sindicatos y las asociaciones empresariales tratan de garantizar que sus acuerdos no tengan

consecuencias inflacionarias, especialmente para los precios de exportación. Esto solo puede funcionar si esas organizaciones tienen autoridad suficiente sobre todas las firmas y los trabajadores para asegurarse de que los términos del acuerdo no sean incumplidos significativamente. Los países donde este tipo de negociación colectiva se convirtió en algo particularmente importante fueron, todos, de economías pequeñas, en gran medida dependientes del comercio exterior. El único país grande involucrado en acuerdos básicamente similares fue Alemania, como parte de un crecimiento de su economía orientado prioritariamente a la exportación (por oposición a una economía prioritariamente mercado-internista). Por otra parte, el movimiento sindical estuvo dominado por una gran organización en los sectores del acero y la ingeniería, particularmente sensibles, por lo tanto, a los precios de exportación.

Estos fueron, entonces, los ingredientes principales del orden socioeconómico de lo que con el tiempo pasó a llamarse socialdemócrata:

- La gestión keynesiana de la demanda, en la que la acción del Estado, lejos de tratar de destruir los mercados, procuraba sostenerlos en niveles que evitaran depresiones y auges igualmente destructivos.
- Estados de Bienestar fuertes que ofrecían a la gente algunos servicios directos (no a través del mercado) y algunas formas de ingreso no dependientes del funcionamiento del mercado o de la propiedad, con lo que se incor-

poraba una diversidad de oportunidades de vida a gente que, de lo contrario, habría estado exclusivamente regida por el mercado.

- En algunos casos, relaciones laborales neocorporativas que buscaban equilibrar la libertad de los trabajadores para organizarse sindicalmente con la necesidad de que los mercados funcionaran de modo eficiente.

¿Qué fue lo que anduvo mal?

## La nueva oportunidad del neoliberalismo

El keynesianismo tenía un talón de Aquiles: las tendencias inflacionarias que lo determinan políticamente. Los países con políticas keynesianas y sin neocorporativismo, o con uno débil (en primer lugar Estados Unidos y el Reino Unido, pero en la década de 1970 también Francia e Italia) se volvieron altamente vulnerables a los shocks inflacionarios. Cada sector de trabajadores trataba de protegerse de la inflación pujando más por sus salarios.

Pero a menos que las demandas salariales fueran coordinadas por sindicatos neocorporativos, que podrían advertir el probable resultado de esa puja, cada aumento de salario exitoso solo conduciría a un alza de los precios. En un mercado totalmente libre ese comportamiento sería castigado con la disminución de la demanda de los productos sobrevaluados y el consiguiente desempleo. En principio, si el Estado keynesiano tenía en cuenta la probabilidad de inflación podía reducir sus propios gastos y/o

aumentar los impuestos con el fin de restringir las presiones inflacionarias. Pero eso significaba imponer recortes al gasto en servicios públicos y admitir un cierto aumento del desempleo, a fin de evitar lo peor: el probable desplome total que sigue a los períodos de inflación. Los gobiernos eventualmente tomaban algunas de estas medidas pero por lo general “demasiado pocas y demasiado tarde”, ya que las consecuencias políticas del desempleo y los recortes en el gasto público no eran muy atractivos.

Después de la oleada de aumentos de precios de los *commodities* en los años 70 (y particularmente del precio del petróleo en 1973 y 1978), este defecto de la gestión de la demanda llegó a ser visto como un error fatal e intolerable. La inflación que golpeó a los países avanzados de Occidente –aunque nada parecida a la que se había experimentado en Alemania en la década de 1920 o en varias partes de América Latina y África más recientemente– fue considerada intolerable. Los políticos fueron persuadidos por expertos en economía de abandonar el keynesianismo en favor de un enfoque más duro. El pleno empleo fue rechazado más como un objetivo directo de la política que como un subproducto de una economía sana; los Estados y los bancos centrales se centraron en conseguir la estabilidad de precios y reducir decisivamente la inflación.

De manera general, un amplísimo e influyente sector de la opinión pública consideraba que el experimento socialdemócrata, con los mercados y la intervención estatal funcionando conjunta y paralelamente, había fracasado. No se podía confiar en que los gobiernos privilegiaran una econo-

mía sana por sobre una popularidad a corto plazo, arriesgándose con intervenciones que debilitarían la capacidad del mercado de hacer su trabajo de premiar el éxito, castigar el fracaso y permitir a los consumidores ejercer su libertad de elección. Como vemos, este desafío intelectual, el desafío neoliberal, estaba listo desde hacía tiempo.

Inicialmente, el principal grito de batalla de los neoliberales consistió en reclamar que la política macroeconómica del Estado debía ocuparse exclusivamente del nivel de precios, mediante el control de la impresión de dinero. Por este motivo esa posición se ha conocido como “monetarismo”. Hubo cierto debate sobre si, en un mundo donde las tarjetas de crédito iban ganando en importancia, la oferta de dinero real sería tan importante como para restringir la demanda y si la oferta de moneda servía verdaderamente como medida del grado de liquidez de que disponen los consumidores.

Estos debates hoy han quedado en el olvido, como ha ocurrido con el término “monetarista”. Será necesario volver a ellos cuando examinemos lo que sucedió realmente con el crédito durante los siguientes treinta años neoliberales. Como veremos en el quinto capítulo, de hecho el neoliberalismo no triunfó en una atmósfera de rígida disciplina crediticia, sino en medio de una expansión incontrolada del crédito.

Fue extraordinaria la velocidad con la que el keynesianismo y otras corrientes que creían en el apoyo estatal a la economía fueron desplazados en el pensamiento económico dominante por el monetarismo y a continua-

ción por otras ideas neoliberales. En 1974 compartieron el Premio Nobel de Economía el austríaco Friedrich von Hayek, considerado el padre del neoliberalismo, y el sueco Gunnar Myrdal, de ideas socialdemócratas. En 1976 se le concedió el Premio a Milton Friedman, un importante impulsor del monetarismo, profesor en la Universidad de Chicago, el principal centro mundial de producción de ideas neoliberales. Friedman utilizó la reputación del premio para participar en una campaña pública en defensa del monetarismo.

En cuatro décadas, nueve profesores neoliberales de Chicago estuvieron entre los 64 ganadores del Nobel. En 1973, agentes de los servicios secretos de Estados Unidos colaboraron en Chile con un golpe de Estado que desplazó con violencia al electo gobierno marxista de Salvador Allende. El general del ejército que tomó el poder, Augusto Pinochet, desató una ola de ejecuciones, instituyó la tortura de los opositores y designó a un grupo de economistas chilenos que habían sido entrenados en Chicago, los así llamados “Chicago boys”, para establecer un régimen económico neoliberal. Actuando sin oposición, ya que ésta había sido prácticamente liquidada, pusieron en práctica la experiencia más profunda en materia de políticas neoliberales. (Friedman hizo a Pinochet una visita intensamente publicitada.)

A fines de 1970 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económicos (OCDE), que habitualmente recomendaba a sus Estados miembros la gestión keynesiana de la demanda, comenzó a abogar

por el libre mercado. Llegó a alentar la privatización de las industrias y servicios de propiedad pública, la imitación de los métodos comerciales privados en los servicios públicos (la así llamada Nueva Gestión Pública) y la convocatoria a la participación del capital privado en la propiedad de instalaciones de infraestructura pública (Sociedades público-privadas).

Durante el mismo período el Banco Mundial pasó de apoyar proyectos estatales a respaldar sobre todo proyectos privados en los países en desarrollo. En 1976 el gobierno laborista del Reino Unido, en medio de una importante crisis inflacionaria, renunció formalmente a las políticas keynesianas y aceptó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abandonar el pleno empleo como objetivo de política directa, a cambio de un préstamo. En 1979 el electorado eligió un gobierno conservador liderado por Margaret Thatcher, que abandonó el compromiso con el keynesianismo que su partido mantenía desde la posguerra, la economía de propiedad mixta y los instrumentos de un Estado de bienestar muy generoso, para cambiarlos por monetarismo, privatizaciones, bajos impuestos para las personas más ricas y un Estado social reducido. Al año siguiente, la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos dio paso a una versión más dura de las mismas políticas y una de las mayores desregulaciones de la economía, especialmente en el sector financiero. Y aquí tuvo lugar otro de esos casos de enfoques de política económica que son puestos cabeza abajo, a los que ya nos hemos referido: una víctima paradójica

de este proceso fue el enfoque sobre la defensa de la competencia, que había inspirado a Alemania y a otros países europeos que creían en el mercado social.

Bajo los criterios desregulatorios de la economía de Chicago la ley de Estados Unidos dejaría de considerar la competencia como un *proceso* que debía garantizar la existencia a la mayor cantidad de empresas, mercados casi perfectos y una muy extendida libertad de elección a los consumidores. En cambio, y a juzgar por los *resultados*, tanto los tribunales de justicia como los teóricos de la economía pasaron a considerar como competencia la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, el predominio de las grandes corporaciones y la sustitución de la idea democrática de la libre elección del consumidor por el interés paternalista en el “bienestar de los consumidores”.

Estos profundos giros en la postura del neoliberalismo han pasado en gran medida desapercibidos por un debate público que sigue obsesionado por el conflicto entre Estado y mercado. Esos poco observados giros constituyen una base importante de los argumentos de este libro. Pero primero debemos completar nuestro rápido repaso del alcance de la transformación del neoliberalismo.

El principio central del neoliberalismo es que los resultados óptimos se lograrán si a la oferta y la demanda de bienes y servicios se les permite ajustarse recíprocamente a través del mecanismo de precios, sin interferencia del Estado o de otras fuerzas, aunque sujetos a las estrategias de fijación de precios y de comercialización de las empresas oligopólicas. Por lo tanto, en el primer caso en cues-

tión de la década de 1970, el gobierno no debía intervenir para proteger el nivel de empleo en el caso en que el precio demandado por los trabajadores por su trabajo fuera tan alto que hiciera caer la demanda de su producto. Si la demanda cae, entonces habrá trabajadores que se convertirán en desempleados, y como resultado, los que queden ocupados no podrán incrementar sus salarios, pues los desempleados estarían encantados de reincorporarse al mercado laboral aunque sea con salarios más bajos. De ese modo el mercado encontrará su equilibrio.

La protección de los niveles de empleo había sido la preocupación central de las políticas de gestión de demanda de posguerra. Pero los neoliberales argumentaban que tratar de hacer esto directamente sería contraproducente en el largo plazo, ya que estaría basado en el apoyo artificial de niveles de demanda crecientemente inflacionarios. Si la gente llegaba a prever que los precios subirían, trataría de anticiparse a esos aumentos con incrementos salariales preventivos. Esto necesariamente aceleraría la tasa de inflación y llevaría paulatinamente a una crisis importante y a la pérdida de empleos. Si, por el contrario, el gobierno se abstenía de intervenir, precios y salarios eventualmente se ajustarían y, en el largo plazo, se alcanzaría un nivel de empleo mayor.

De esto se desprende que la crítica neoliberal al mercado de trabajo no se detenía en el nivel macro de las políticas de gestión de la demanda, sino que se extendía, en general, a los intentos de gobiernos o sindicatos de establecer normas sobre horarios y condiciones de tra-

bajo y regímenes de pensiones que no emergieran de la competencia del mercado. Sostenía, además, que los costos de esta política harían subir los precios, reducirían la demanda y, por lo tanto, generarían más desempleo. Los neoliberales, por lo tanto, abogaban por el dismantelamiento de la legislación de protección laboral y la eliminación o reducción de la carga de los costos de los seguros sociales sobre los empleadores. Esta parte del programa neoliberal ha encontrado considerable resistencia cada vez que se intentó ponerla en práctica en democracia, ya que muchos de los derechos y coberturas sociales que ataca son muy populares.

Recién en 1994 la OCDE, en su informe Estudio del Empleo, se comprometió plenamente con el dismantelamiento de la legislación laboral. La Unión Europea (UE) adhería a un modelo que balanceaba competitividad económica con fuertes derechos sociales, al que designó “modelo social europeo”, hasta que a principios del nuevo siglo adoptó un giro más netamente neoliberal. A esa altura, sin embargo, la OCDE había comenzado a detectar algunas de las consecuencias negativas de los mercados laborales altamente flexibles, y comenzó a cambiar su posición hacia una evaluación más positiva de algunos de los elementos de la estabilidad laboral.

De esto se deduce que los neoliberales son inequívocamente hostiles a los sindicatos, que tratan de interferir en el normal desarrollo del mercado de trabajo. Desde su perspectiva, las únicas consecuencias de la acción gremial son ineficiencia en el corto plazo y desempleo en el largo.

No obstante, en sociedades democráticas no pueden proponer ilegalizarlos, ya que esto implicaría usar el poder del Estado de un modo inconsecuente con los fundamentos del liberalismo, y en muchas sociedades generaría un alto nivel de conflicto. Los gobiernos neoliberales pueden, sin embargo, asegurar que no se interpondrán obstáculos en el camino de aquellos empleadores que deseen excluir a los sindicatos de su fuerza laboral.

Otro objetivo de las políticas neoliberales fue una cadena completa de acciones gubernamentales que protegían a ciertas industrias o determinadas empresas de la competencia del mercado. En algunos casos (sobre todo en Austria, Francia, Italia y Reino Unido), esto se consiguió a través de la propiedad estatal de empresas. Estas empresas usaban los mercados para proveerse de bienes de capital, materias primas, mano de obra y clientes, pero sus recursos financieros provenían del Estado, de modo que estaban protegidas de las consecuencias de la competencia. Por ejemplo, si pagaban a sus trabajadores por encima de los valores de mercado, el gobierno subsidiaba sus pérdidas. Por otro lado, los gobiernos las podían dejar descapitalizadas, dado su escaso interés en maximizar beneficios, provocando así un suministro inadecuado de los bienes y servicios en cuestión. La mayoría de las industrias de propiedad estatal de este tipo habían llegado a manos del sector público porque sus actividades eran difíciles de someter a la normal competencia del mercado; eran, o habían sido al establecerse originariamente, “monopolios naturales” –por ejemplo, el suministro de electricidad, gas y agua, la radiodifusión, los

ferrocarriles. Los neoliberales propusieron la venta a privados de los activos de esas empresas e industrias e intentaron por varias vías introducir una competencia limitada en los sectores involucrados. En algunos casos (telecomunicaciones, por ejemplo) el cambio tecnológico lo permitió, en otros (ferrocarriles, por caso) los servicios fueron divididos en parcelas más pequeñas y vendidos a empresas rivales entre sí, en el limitado número de casos en que la competencia sobre rutas específicas era factible. En otras, como el agua, los gobiernos liberales se contentaron con privatizar en beneficio de monopolios, sin mercados ni competencia. En tales instancias, propusieron establecer cierto tipo de regulación. Donde los gobiernos no poseían empresas pero ofrecían diversas formas de subsidio o estímulo a las privadas que existían, el neoliberalismo propuso la abolición de los estímulos con el objetivo de establecer reglas de juego parejas y competencia sana.

El motivo de estos subsidios había sido, habitualmente, proyectar a alguna empresa nacional a los mercados mundiales. Esta clase de políticas funcionaba sobre todo a nivel de los acuerdos comerciales internacionales. En este plano, hasta gobiernos neoliberales convencidos como el de Estados Unidos a menudo preferían obtener ventajas para su país antes que perseguir el libre comercio. El máximo logro de esta corriente del neoliberalismo fue la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995 para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Un objetivo último de las políticas neoliberales han sido toda la gama de actividades que históricamente se

desarrollaron en muchos países como servicios públicos. La distinción entre éstos y la provisión de bienes y servicios por parte de organismos públicos, anteriormente tratada, no está clara. Por ejemplo: en Alemania y los Países Bajos la prestación de servicios postales se privatizó y se rige plenamente por normas de mercado, mientras que los servicios de salud son considerados como una atribución del Estado; en Estados Unidos ocurre lo opuesto. En general, servicios públicos (como el nombre implica) abarca la provisión de servicios, no de bienes materiales; muchas de las empresas antes mencionadas como de propiedad pública, originariamente habían sido de propiedad privada. Sin embargo, las distinciones no son absolutas. Hay una tendencia a incluir bajo el concepto de “servicios públicos” tanto aquellos servicios que son fundamentales para las posibilidades de vida (salud, educación) como los que se consumen más colectivamente que a título individual (por ejemplo, la defensa, la salud pública).

Aquí hay que señalar que estos servicios, siempre anotados en la nómina de privatizables por parte de los neoliberales, han demostrado ser huesos duros de roer. Las medidas destinadas a introducir en ellos propiedad privada y/o la lógica de mercado no se desarrollaron con fuerza hasta el final avanzado del siglo XX.

La lógica neoliberal se aplica ciertamente a ellos. Si servicios como salud, educación y seguridad fueran provistos en el mercado por firmas que procuran la maximización de las ganancias, los usuarios de estos servicios podrían (a

menos que el proveedor privado fuera monopolístico, como ocurre con frecuencia) expresar sus preferencias por su disposición a comprar una versión particular de ellos y no otras, o incluso podría optar por no adquirirlas en absoluto; mientras que los servicios prestados por el gobierno podrían (aunque de ninguna manera necesariamente) no ofrecer opciones o hasta ser de consumo obligatorio. Además, los propietarios privados guiados por la ganancia tienen un incentivo para maximizar la eficiencia y la relación costo-beneficio de la prestación, lo que podría no ocurrir con el gerenciamiento de un servicio público. La preferencia neoliberal se inclina, por lo tanto, por la completa privatización y mercantilización, a través de empresas que ofrecen servicios a clientes privados.

La gran popularidad de los servicios públicos impidió en general el cumplimiento de ese objetivo, lo que produjo una construcción a mitad de camino, en la que el Estado contrata a firmas privadas para la provisión de un servicio público del que el propio Estado es el cliente. Otra forma de arreglo ha sido la sociedad público-privada (PPP, por sus siglas en inglés), en la cual el gobierno sigue proporcionando el servicio a través de sus propios empleados, pero la infraestructura, habitualmente, el equipo y los edificios, son propiedad de una empresa privada, que luego se la alquila al servicio público, quien paga una renta anual. En otro enfoque, similar al de la PPP, el gobierno sigue proporcionando el servicio a través de sus propios empleados, pero se espera que ellos se comporten como si estuvieran prestando un servicio para una empresa privada con fines de

lucro. Este ha sido el sentido principal de la nueva gestión pública, con usuarios relacionados con el servicio como clientes en el mercado.

El enfoque general que describe el término “neoliberalismo” está constituido entonces por un amplio abanico de políticas. Rara vez se las encuentra en estado puro. La principal excepción sería la de Chile, que notablemente no era una democracia cuando se lanzó el experimento. El caso de Singapur es normalmente considerado también como un acercamiento al ideal neoliberal, pero tampoco es una democracia y el Estado allí tiene una fuerte presencia moral dentro de la sociedad, pese a que la asistencia social está privatizada y las leyes laborales son muy débiles.

En los sistemas democráticos que están formados por poblaciones con diferentes valores e intereses, hay que alcanzar compromisos entre todo tipo de enfoques monolíticos y coherentes. Por ejemplo, aunque en los países nórdicos los Estados han adoptado elementos importantes de la agenda neoliberal –en particular la privatización–, siguen manteniendo una acción social estatal extendida y poderosos sindicatos. Estas dos tendencias potencialmente opuestas llegan a acuerdos entre ellas, aparentemente con significativo éxito. Estas sociedades siguen teniendo fuertes niveles de eficiencia y de innovación económica, al mismo tiempo que alcanzan altos puntajes en los “índices de felicidad”.

Hacia el final de este libro se habrá cerrado un juicio general negativo sobre la era neoliberal. Por eso no está

mal terminar esta presentación inicial señalando ciertas características que muchas personas con valores políticos divergentes juzgarían positivas. Para los críticos del enfoque general, éstas constituyen bebés en el baño del neoliberalismo, que deben ser cuidados para que no se los tire con el agua sucia.

En primer lugar, el neoliberalismo ha proporcionado ciertos escapes de la dominación del Estado y ha otorgado poder de decisión a personas comunes acostumbradas a tomar lo que les dieran. Esto ha sido particularmente importante, dado que vivimos en un tiempo donde los partidos y las políticas parlamentarias son vistas en general como algo negativo, más como un juego para los que buscan un puesto político que como un foro para tratar las inquietudes populares.

En segundo lugar, el enfoque neoliberal ha dado respuesta a cuestiones como el centralismo y la lejanía entre el poder y las personas comunes, que son endémicas en sociedades populosas y complejas. Pese a esto hay que reconocer que el neoliberalismo no siempre se ha asociado bien con las sensibilidades locales. Sí lo ha conseguido en Estados Unidos, en términos de los gobiernos locales, donde la historia y los estereotipos pintan a un Estado central inclinado a la izquierda enfrentado a políticos locales de derecha. Pero, en ese país el neoliberalismo también ha sido asociado con el triunfo de las grandes empresas sobre las firmas más pequeñas. En contraste, en el Reino Unido los autores de políticas neoliberales –todos los partidos que gobernaron desde 1979– han conside-

rado a los gobiernos y a otras fuerzas locales como fuentes anti-mercado que interferían en sus propios proyectos de mercantilización. En este sentido los neoliberales fueron centralizadores. Para esta política tenían sólidos, aunque paradójicos, fundamentos históricos.

El ascenso original del capitalismo en Europa corrió paralelo a la concentración de poderes, previamente feudales, en manos de monarcas centralizadores. Si la política y la economía debían ser separadas –regla número uno tanto del liberalismo como del neoliberalismo– había entonces que reunificar, como primer paso, el poder que estaba esparcido en toda la sociedad y había que concentrarlo en un punto que, si el monarca así lo deseaba, podría utilizarse a favor del mercado. Por eso, la oposición local versus central no debería ser automáticamente interpretada como Estado versus mercado.

Finalmente, debemos volver a la flexibilización del paradigma neoliberal. Particularmente la política de los países nórdicos, pero también la de Gran Bretaña y los Estados Unidos, ha demostrado una capacidad para combinarse con otras ideologías y enfoques políticos. Esto es importante no solo porque las ideas dominantes muestran la capacidad de hacerlo, sino porque es la mejor garantía de que la diversidad de intereses representados por las sociedades plurales alcance cierto reconocimiento; pero también debido a la profunda incertidumbre de todos los proyectos humanos. Nunca podemos saber si un conjunto particular de ideas contiene todas las respuestas correctas; aun si hoy las tuviera podría no estar equipado para

enfrentar los desafíos inesperados de mañana. Las doctrinas monolíticas que están seguras de tener el monopolio de la sabiduría y que aplastan toda oposición por lo general terminan por ser confrontados por desafíos para los que no tienen respuestas en su repertorio.

Este fue el caso del comunismo soviético. Los ideólogos neoliberales ciertamente muestran fuertes tendencias en esa dirección, pero las realidades prácticas de la vida en democracia los fuerzan a llegar a acuerdos. Los eslabones que aún se mantienen entre neoliberalismo y la tradición histórica liberal más amplia reflejan que puede responder a ese desafío. Este será un asunto importante en las probables transformaciones futuras.

Para avanzar más con este argumento debemos explorar algunas ideas básicas acerca de la naturaleza de los mercados y sus limitaciones. Esto implica moverse a un nivel más abstracto de análisis y aceptar algunos términos que podrían resultar poco familiares para muchos lectores, pero que son importantes para una completa comprensión de los asuntos en juego. Ese es el objetivo del próximo capítulo.

# Índice

Agradecimientos	7
Prefacio	9
Sobre este libro	15
Capítulo 1	
La carrera previa del neoliberalismo	19
Capítulo 2	
El mercado y sus limitaciones	55
Capítulo 3	
La absorción del mercado por las corporaciones	93
Capítulo 4	
Empresas privadas y negocios públicos	127

Capítulo 5 Keynesianismo privatizado: deuda en lugar de disciplina	165
Capítulo 6 De la connivencia corporativo-política a la responsabilidad social empresaria	207
Capítulo 7 Valores y sociedad civil	237
Capítulo 8 ¿Qué es izquierda de lo que es derecha?	265
<i>Referencias</i>	291
<i>Otras lecturas</i>	295